

## Lugares de detención

14

### Balance de las recomendaciones anteriores

Turquía, Perú, Argelia, Tailandia y la República Bolivariana de Venezuela han instado a Colombia a implementar procedimientos penales alternativos para controlar el hacinamiento en las cárceles, fortalecer las políticas penitenciarias y mejorar las condiciones de reclusión. Sin embargo, continúa el hacinamiento y las malas condiciones en lugares de privación de la libertad en Colombia, pues no se aplican los estándares internacionales como las Reglas Nelson Mandela (1) y las Reglas de Bangkok. (2)

A pesar de la expedición de la ley 2292 de 2023, la cual adopta acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias de política criminal y penitenciaria, no ha sido posible implementar parte de las medidas allí establecidas, pues en este momento se encuentra en proceso de reglamentación para su aplicación.

### Desafíos

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y de algunas entidades, en los últimos años hemos experimentado significativos retrocesos en el sistema penitenciario. Los lugares de detención se han vuelto aún más herméticos, y las graves deficiencias en la prestación de servicios de salud y alimentación son cada vez más frecuentes.

La responsabilidad del Estado se ha diluido, en parte debido a la tercerización a entidades privadas a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Además, parte del hacinamiento de los Establecimientos de Reclusión Ordinaria Nacional (ERON) se ha trasladado a los Centros de Detención Transitoria (CDT), donde la situación empeora mes tras mes.

Por ejemplo, en noviembre de 2022 se registraron 27 CDT con una ocupación superior al 1000%, y para abril de 2023 ese número aumentó a 34 establecimientos.

Casi el 25% de las personas detenidas en estos centros llevan más de 12 meses en detención preventiva, lo que sugiere que muchas de ellas podrían estar privadas injustamente de su libertad.

(1) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015.

(2) Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Mujeres Reclusas y Medidas No Privativas de Libertad para Mujeres Delincuentes. Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010.

Estas personas, aún sin ser condenadas, pasan más de un año encerradas en celdas con un nivel de hacinamiento nunca antes visto. En muchas ocasiones, las celdas carecen de ventanas para acceder a la luz solar, y en otros casos, los CDT no cuentan con suficientes celdas, lo que lleva a que las personas sean esposadas en el patio, expuestas a las inclemencias del clima.

Existe un gran subregistro de los fallecimientos de las personas detenidas, pues la Policía manifiesta no contar con normas para el tratamiento a población privada de la libertad en los CDT. Este vacío legal ha generado incentivos para el exceso en el uso de la fuerza, aislamientos prolongados, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.

Además, se sigue abusando del régimen de aislamiento como sanción disciplinaria en las Unidades de Tratamiento Especial (UTE), incluso en el caso de personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Este uso prolongado, arbitrario y carente de garantías procesales se lleva a cabo en condiciones inhumanas y degradantes. Entre 2019 y 2023, se han registrado 374 denuncias por uso excesivo de la fuerza, 11 por violencia sexual y 4.453 relacionadas con violencia entre reclusos en los ERON, lo que indica una posible negligencia por parte de los funcionarios públicos. Estos datos reflejan una preocupante situación de violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario en Colombia.

## Recomendaciones

1. Adoptar medidas urgentes para eliminar el hacinamiento en cárceles y centros de reclusión, priorizando el uso de medidas alternativas a las penas privativas de libertad.
2. Trasladar a todos los privados de la libertad a establecimientos penitenciarios y carcelarios, mientras no se garanticen las condiciones adecuadas en los CDTs. Además, asegurar que la prisión preventiva no se aplique o prolongue de manera excesiva.
3. Incrementar la inversión en infraestructura penitenciaria, especialmente para el mantenimiento y mejoramiento de los lugares de detención.
4. Garantizar la prestación de servicios especializados de salud y acceso oportuno a medicamentos.
5. Asegurar la pronta e imparcial investigación de casos de violencia y muertes en lugares de detención, mediante un órgano independiente.
6. Incorporar en las normas las Reglas Nelson Mandela que prohíben la reclusión en régimen de aislamiento para personas con discapacidad.